



Poder Judicial de la Nación

Cámara Federal de Apelaciones Resistencia – Secretaría Penal N° 2-

Resistencia, a los doce días del mes de agosto del año dos mil veinticinco.

VISTO:

El presente expte. **FRE 8931/2018/3/CA3** caratulado "**LEGAJO DE APELACIÓN EN AUTOS: R [REDACTED], OMAR NALDO S/INF. ART. 303 INC. 2 A**" proveniente del Juzgado Federal N°2 de esta ciudad de Resistencia, del que;

RESULTA:

1.- a- Que en fecha 20/11/2024 el Juez de grado dispuso, entre otras medidas, el decomiso definitivo y anticipado de los bienes de Omar Naldo R [REDACTED]. Ello, ante la imposibilidad de enjuiciamiento por su fallecimiento acaecido el 20/10/2023, por comprobarse la ilicitud de su origen, y dado el estado de la causa en que se investiga el hecho material al que están vinculados. Asimismo, dispuso que los fondos y bienes decomisados se pondrán a disposición de la cuenta especial del Tesoro Nacional, debiendo destinarse un 30 por ciento de los mismos a los fines establecidos por el art. 27 de la ley 25.246, mientras que el porcentaje restante será predestinado a financiar obras de infraestructura y/o viviendas públicas en la Provincia del Chaco que beneficien de modo directo a la población más vulnerable, una vez cumplidos los mecanismos legales establecidos.

Consecuentemente, el Juzgador libró oficios a la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia del Chaco, siendo informado en el mes de diciembre del año 2024 respecto a los requisitos que debían cumplirse para la debida inscripción de los bienes muebles e inmuebles producto del decomiso definitivo ordenado.

Con posterioridad, el presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, Cr. Juan José F [REDACTED] C [REDACTED], presentó un escrito a través del cual sometió a consideración del Juzgador la posibilidad de otorgar a dicho Organismo -en calidad de depositario-, vehículos que eventualmente resulten recuperados de los distintos procedimientos que lleva adelante el fuero, a los fines de contar con la disponibilidad de una movilidad apta que permita los traslados a las distintas localidades del interior provincial. Todo ello en el marco de las facultades y potestades atribuidas a dicha dependencia por la Constitución provincial y la Ley orgánica del Tribunal de Cuentas N°831-A.

b.- Así las cosas, mediante resolución de fecha 05/05/2015 y citando lo normado por el art. 27 de la ley 25.246, el *a quo* dispuso la *inscripción definitiva de los inmuebles identificados en el Folio Real N°4457 y Folio Real N°3330, ambos del departamento O'Higgins*



Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente

Fecha de firma: 12/08/2025

Firmado por: PATRICIA BEATRIZ GARCIA, JUEZA SUBROGANTE

Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA LORENA RE, SECRETARIA DE CAMARA



#40062064#466424029#20250812120217086

Provincia del Chaco del Registro de la Propiedad Inmueble de Presidencia Roque Sáenz Peña (sic), todo ello en base a los requisitos informados por el Organismo los que se detallan en la disposición N°3/2024 de fecha 01/12/2024.

Asimismo, otorgando un destino que -según consideró- brinda un servicio a la comunidad, realizó dicha inscripción a favor del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Gobierno de la Provincia del Chaco -respectivamente-, afirmando que debía librarse el correspondiente documento judicial con los mismos requisitos requeridos para inscribir oficios de expropiación.

Por otro lado, y ante la petición cursada por el Presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, estimó pertinente la entrega, en carácter definitivo, del vehículo Toyota Hilux dominio colocado AA[REDACTED]M, el que fuera secuestrado en el mes de abril del corriente año en los autos principales. Al efecto, dispuso que su utilización debía ser única y exclusivamente para llevar a cabo tareas en el marco de lo establecido por la Constitución Provincial y su Ley Orgánica, remarcando que la entrega del rodado debía ser bajo debida constancia, tomando los titulares registrales los recaudos necesarios a efectos de efectivizar la misma bajo su exclusiva autorización.

Como fundamento de dicha cesión, expuso las carencias de los organismos del Estado y la necesidad imperiosa de contar con vehículos para el desenvolvimiento de las tareas asignadas, a lo que adunó la situación de los rodados secuestrados, los que -afirmó- se encuentran depositados en un predio trayendo consecuencias al medio ambiente, no contando el Poder Judicial con lugares adecuados para la conservación de ese tipo de bienes.

2.- Contra lo resuelto el Fiscal Federal interpuso recurso de apelación. Fundamentalmente alegó a la arbitrariedad del auto interlocutorio, por carecer de adecuada fundamentación y contradecir normas legales, como el propio artículo 27 de la Ley 25.246 que se cita.

Además, expuso irregularidades procesales, destacando que -a diferencia de lo que sostiene el Juez- esta Cámara Federal de Apelaciones, en una anterior incidencia, sólo resolvió en relación al auto de procesamiento de Rubén Antonio R[REDACTED], sin expedirse sobre el decomiso definitivo.

A su vez, advirtió la contradicción existente entre lo resuelto ahora y en fecha 20/11/2024, oportunidad en que el Magistrado *a quo* decidió -entre otras cuestiones- disponer el decomiso definitivo y anticipado de los bienes de Omar Naldo R[REDACTED] tras decretarse su



Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente





Poder Judicial de la Nación

Cámara Federal de Apelaciones Resistencia – Secretaría Penal N° 2-

fallecimiento, estableciendo su distribución conforme lo indica la normativa de la mencionada Ley, y el destino del monto restante para financiar infraestructura que beneficie a la población más vulnerable.

Sin embargo -afirmó- luego dictó la resolución en crisis, realizando una disposición definitiva de dos inmuebles, uno de ellos a favor del Gobierno de la Provincia del Chaco, y el otro del Ministerio de Seguridad de la Nación; como también del vehículo Toyota Hilux dominio A [REDACTED] M, otorgado a título personal al Presidente del Tribunal de Cuentas de esta provincia, ordenando las inscripciones registrables definitivas. En este punto, argumentó que la entrega del automóvil se solicitó en carácter de depositario, atribuyéndose el Juez la facultad de otorgarlo como destinatario definitivo.

Señaló asimismo que no se notificó adecuadamente a los herederos del fallecido R [REDACTED], como tampoco se dio intervención a la Unidad de Información Financiera (en adelante UIF) respecto a lo resuelto en el punto 13° de la resolución dictada en noviembre de 2024, a través del cual se refería a la Ley que rige a dicho Organismo.

De tal forma, consideró la disposición de los bienes prematura y discrecional, sin contemplar la posibilidad de que los mismos sean destinados a ONG, o estamentos del sector público que se circunscriban a sectores vulnerables. Cuestionó también la posible influencia política en la decisión del juez, señalando que prestó funciones en el pasado como funcionario del Tribunal de Cuentas del Chaco.

3.- Durante el trámite procesal, el representante de la UIF -Dr. Matías E. Saicha Ibáñez- digitalizó un escrito a los fines de que se otorgue su intervención en los presentes autos en condición de tercero interesado en el hecho, conforme lo establece el art. 27 de la Ley 25.246, haciéndose lugar a dicha petición.

Seguidamente, la referida entidad interpuso recurso de apelación contra lo resuelto en fecha 20 de noviembre del año 2024 -más precisamente en el punto 13° de la parte resolutive de tal decisión-, oponiéndose asimismo a la entrega definitiva de bienes registrables ordenada en fecha 5 de mayo del corriente año.

Respecto del primer resolutorio se agravó por cuanto el Magistrado dispuso -según su visión- de forma arbitraria el fraccionamiento de los fondos y bienes decomisados, siendo que solo el 30% de los bienes fueron destinados a la UIF, mientras que el 70% restante se asignó a obras públicas en la Provincia del Chaco.



Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente

Fecha de firma: 12/08/2025

Firmado por: PATRICIA BEATRIZ GARCIA, JUEZA SUBROGANTE

Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA LORENA RE, SECRETARIA DE CAMARA



#40062064#466424029#20250812120217086

De esta manera puntualizó el recurrente que el artículo 27 de la Ley 25.246 establece que la totalidad de los bienes decomisados deben ser destinados a la Unidad de Información Financiera.

Desde otro ángulo se agravió al sostener que, en la resolución del presente año, el Juez ordenó la inscripción definitiva de inmuebles y la entrega de un vehículo a instituciones provinciales y nacionales, omitiendo totalmente la intervención y notificación al organismo de mención.

Alegó que ambas resoluciones carecen de sustento jurídico y contradicen el principio de legalidad, afectando la transparencia y coherencia con los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

En esa línea, adujo que permitir decisiones discrecionales sobre el destino de bienes decomisados podría generar precedentes graves y afectar la lucha contra el lavado de activos. Enfatizó en la importancia de respetar el marco legal vigente para garantizar la operatividad de la UIF, como así la transparencia en la administración de bienes decomisados.

4.- Concedidos los recursos de apelación intentados y encaminado debidamente el trámite procesal, se radican los autos ante esta Alzada. Habiendo manifestado la representante del Ministerio Público Fiscal el mantenimiento del recurso interpuesto en la anterior instancia, y solicitado la realización de la audiencia prevista en el art. 454 del CPPN bajo la modalidad oral, se fijó fecha para la realización de la audiencia de Ley.

Así las cosas, en fecha 07/08/2025 se llevó a cabo dicho acto procesal a través de la plataforma "Zoom", oportunidad en la que estuvieron conectados los recurrentes: el Sr. Fiscal General, Dr. Federico Martín Carniel y las representantes de la Unidad de Información Financiera, Dras. Inés María Astudillo y María Sofía Karlen, quienes a su turno hicieron uso de la palabra en los términos establecidos en la normativa legal, manteniendo y ampliando sus argumentos por los que solicitaron se declare la nulidad absoluta de la resolución de fecha 05/05/2025.

Asimismo, se dejó constancia al inicio de la audiencia que el Dr. Reynaldo Pisarello no se conectó a la mencionada plataforma, no obstante encontrarse debidamente notificado de la celebración del acto procesal.

5.- El registro digital de la audiencia se encuentra incorporado al Sistema Informático de Gestión Judicial Lex100, al que se hace



Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente

Fecha de firma: 12/08/2025

Firmado por: PATRICIA BEATRIZ GARCIA, JUEZA SUBROGANTE

Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA LORENA RE, SECRETARIA DE CAMARA



#40062064#466424029#20250812120217086



Poder Judicial de la Nación

Cámara Federal de Apelaciones Resistencia – Secretaría Penal N° 2-

remisión para evitar reiteraciones innecesarias, habiéndose resuelto dictar un intervalo a efectos de continuar con la deliberación y decidir respecto de los agravios intentados, de conformidad a lo establecido por el art. 455, segundo párrafo del CPPN (según Ley 26.374).

Quedan formalmente estas actuaciones en condición de ser resueltas.

CONSIDERANDO:

I.- En este marco, habilitada la jurisdicción del Tribunal y configurado el objeto de conocimiento, procede el examen de las cuestiones ventiladas.

II.- Por motivos de orden expositivo analizaremos en primer lugar los agravios vertidos por la UIF, sostenidos en oportunidad de la audiencia del art. 454 del CPPN, respecto a lo dispuesto por el Juez en su resolución dictada en noviembre de 2024, puntualmente en el apartado N°13 de la parte resolutive.

a) Iniciando dicho tratamiento, la UIF alegó la total falta de notificación a ese organismo de lo decidido, señalando que tratándose de una causa que tiene a su único partícipe imputado del delito de lavado de activos (art. 303 del CP) -con anterioridad al dictado del Decreto N°274/2025-, la intervención de dicha entidad se tornaba necesaria a los fines de tomar conocimiento sobre el estado del expediente, como así del dominio de bienes que se encuentran en discusión.

Al respecto, si bien acierta el apelante respecto a que dicho organismo debió ser oportunamente notificado de las actuaciones y encontrarse en pleno conocimiento y pie de igualdad en el curso de la causa principal (y de todas sus incidencias), lo cierto es que dicha deficiencia ha sido subsanada por el propio recurrente al solicitar su intervención en carácter de tercero interesado y apelar ambas decisiones, lo que fue concedido y dio lugar a la presente vía recursiva.

Es decir, la falta de notificación denota una deficiencia por parte del Juez -quien, además, ordenó dicha notificación-, no obstante lo cual no se observan vulnerados los derechos y garantías de la parte en este caso, requisito indispensable para invalidar un acto procesal.

Abundando, el principio de trascendencia implica que quien pretende anular un acto jurídico debe expresar el perjuicio sufrido y las defensas que se ha visto privado de oponer, colocando a la parte en estado de indefensión, de manera concreta y efectiva. Así, la apuntada carga procesal no se satisface con la mera invocación genérica de que se ha violado el derecho de defensa en juicio, y es por ello que dicho



Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente

Fecha de firma: 12/08/2025

Firmado por: PATRICIA BEATRIZ GARCIA, JUEZA SUBROGANTE

Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA LORENA RE, SECRETARIA DE CAMARA



#40062064#466424029#20250812120217086

agravio no tendrá acogida favorable, toda vez que -como se dijo- el perjuicio no llegó a concretarse.

b) Zanjado lo anterior, corresponde la consideración del agravio referido a lo dispuesto por el Juez en el Punto 13 de la resolución primigenia, dado que se encuentra objetada la manera en que se dispuso la distribución de los fondos decomisados, solicitando el organismo recurrente la totalidad de los mismos para el desarrollo de sus actividades y financiamiento conforme lo establece el art. 27 de la Ley citada.

Ahora bien, la propia ley invocada reconoce que, en estos casos en que estamos frente al delito de lavado de activos, se produce una doble vulneración de los bienes jurídicos tutelados. Si bien existe la afectación del bien jurídico orden económico financiero, el que interesa exclusivamente al recurrente, es igualmente relevante que los delitos precedentes en estos autos implican la vulneración de otros bienes jurídicos que afectan en mayor medida al sector de la población más vulnerable. Por lo que, al regular el destino del decomiso, no puede desconocerse esa patente situación y otorgar de manera exclusiva los bienes a un solo organismo.

Así es que, en los casos de decomiso de activos, la naturaleza del delito precedente es un dato esencial para establecer el destino de los fondos y bienes decomisados.

En este punto resulta imperioso advertir que el delito de lavado de activos que aquí se investiga se vincula a la ilícita disposición del dinero otorgado por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda para la creación de viviendas sociales que no se verificaron (Cfr. FRE 8931/2018/2), por lo que resulta innegable que lo dispuesto por el Juez oportunamente obedeció a un fin social a efectos de enmendar el perjuicio cometido. Y en ese sentido, esta Alzada comparte el criterio expuesto por el Fiscal General en el marco de la audiencia de ley, al sostener que tal decisión luce correcta de cara a las disposiciones del art. 305 del Código Penal en lo pertinente y aplicable a este caso.

Insistimos, teniendo en consideración la finalidad reparadora cabe valorar positivamente la decisión del Juez de la anterior instancia de buscar un mecanismo para que, en definitiva, se produzca una reparación a las personas de escasa capacidad económica a las que las viviendas se encontraban destinadas, pues tratándose de maniobras que involucran hechos de corrupción estatal y el desvío de fondos públicos destinados a obras públicas, las víctimas que deben ser



Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente





Poder Judicial de la Nación

Cámara Federal de Apelaciones Resistencia – Secretaría Penal N° 2-

reparadas son, precisamente, los habitantes de esta provincia que se han visto privados de obras de infraestructura y vivienda.

Y a diferencia de lo planteado por la UIF, la Ley cuya aplicación pretende no es la única aplicable y debe complementarse con el plexo normativo y con la impronta que el legislador ha pretendido dar a las normas en juego, correspondiendo a los tribunales intervinientes hacerlo por aplicación del artículo 522 del Código Procesal Penal de la Nación, norma vigente, en consonancia y correlación con las arriba analizadas.

Por tal motivo es que entendemos procedente que la totalidad de los bienes decomisados sean puestos a disposición de la cuenta especial del Tesoro Nacional, sin perjuicio de que el 30% del monto total se destine al financiamiento de la UIF o a los efectos que dicha Unidad estime corresponder, mientras que el porcentaje restante sea destinado a obras públicas de la Provincia del Chaco, a través de los mecanismos legales establecidos a ese fin con la finalidad ulterior de reparar el daño causado a la sociedad en su conjunto y a la población vulnerable en particular.

En efecto, idéntico criterio fue sostenido por este Tribunal –aunque con distinta integración- en autos FRE 2760/2018/66 (Resolución de fecha 21/05/2021), los que fueron elevados a la Cámara Federal de Casación Penal, tras ser recurrido lo resuelto por la Defensa de los herederos, pero no así por la entidad financiera en el punto de controversia. Por lo demás, lo decidido quedó firme al ser rechazado el recurso de casación oportunamente.

Por otro lado, respecto a los precedentes jurisprudenciales que cita la parte recurrente, cabe señalar que en tales causas la UIF no tuvo intervención y, particularmente en este estadio, respecto a la causa 18170/2018, este Tribunal no se ha expedido sobre bienes sujetos a decomiso definitivo.

En conclusión y de conformidad a lo hasta aquí expuesto, procede rechazar lo argumentado en lo pertinente por el recurrente, y en consecuencia, confirmar el punto 13 de la resolución recurrida en cuanto dispone el modo de distribuirse los fondos provenientes del decomiso anticipado de los bienes del causante. Ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas o civiles que pudieran corresponder en virtud de lo dispuesto por el art. 305 *in fine* del CP.

II.- Continuando con el análisis de los cuestionamientos que habilitaran esta instancia procesal, tanto los representantes del MPF como de la UIF han expresado y mantenido agravios comunes respecto a la resolución de fecha 05/05/2025, entre ellos, la arbitrariedad,



Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente

Fecha de firma: 12/08/2025

Firmado por: PATRICIA BEATRIZ GARCIA, JUEZA SUBROGANTE

Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA LORENA RE, SECRETARIA DE CAMARA



#40062064#466424029#20250812120217086

contradicción y consecuente nulidad absoluta de la sentencia dictada. En atención a lo expuesto, los señalados tópicos serán abordados en forma conjunta, sin perjuicio de efectuar las consideraciones particulares en los casos que el Tribunal lo considere pertinente.

Ahora bien, la Corte ha señalado que corresponde su intervención con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, si el fallo impugnado propone una exégesis irrazonable de la norma aplicada que la desvirtúa y torna inoperante (Fallos: 330:4841; 326:4515; 326:1864, 325:1571 entre otros).

En afín orden de análisis se ha dicho que "La motivación constituye el signo más importante y típico de la racionalización de la función jurisdiccional, se establece como uno de los requisitos esenciales de la sentencia... es la enunciación de las premisas del silogismo que concluye en los puntos resolutivos... una comprobación lógica para controlar a la luz de la razón, la bondad de una decisión surgida del sentimiento; es la racionalización del sentido de justicia...' (Calamandrei, Proceso y Democracia, p.115 y ss cit. por Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, "Código Procesal Penal de la Nación", ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, tomo I, pág. 361).

Y en ese aspecto estimamos que, entre otras carencias argumentativas, la resolución atacada no contiene los mínimos fundamentos tendientes a establecer las razones por las cuales el Juez consideró la inscripción y el otorgamiento del rodado en contraposición a lo sostenido en la anterior resolución dictada en el marco de la causa. De tal modo no pueden conocerse los motivos técnicos puntuales que llevaron a mutar la decisión, como lo expresó el Fiscal en la audiencia al observar que el Juez modificó el objeto de lo anteriormente resuelto. Ello así, se han vulnerado las reglas que hacen a la motivación de las sentencias, determinando su arbitrariedad y, por consiguiente, su invalidez como acto jurisdiccional válido.

Esta ha sido la orientación seguida por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, al establecer que "...a la condición de los órganos para aplicar el derecho, va entrañablemente unida la obligación de los jueces de fundar sus sentencias, para acreditar que son derivación razonada del derecho vigente y no producto de la voluntad individual...", y que dicha exigencia se cubre con la seriedad de los fundamentos, pues reconoce raíz constitucional (Fallos: 297:362: E.D. del 08/02/93, f.44.795).

III.- Con estos parámetros, habiendo delimitado el marco jurídico de los agravios, surge que el auto interlocutorio dictado por el



Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente

Fecha de firma: 12/08/2025

Firmado por: PATRICIA BEATRIZ GARCIA, JUEZA SUBROGANTE

Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA LORENA RE, SECRETARIA DE CAMARA



#40062064#466424029#20250812120217086



Poder Judicial de la Nación

Cámara Federal de Apelaciones Resistencia – Secretaría Penal N° 2-

Magistrado presenta los rasgos aludidos por los recurrentes, luciendo arbitrario por falta de fundamentación y notoria contradicción con lo dispuesto en fecha 20/11/2024.

En efecto, la resolución dictada en noviembre del pasado año ordenó el decomiso definitivo de una serie de bienes propiedad del entonces imputado en los autos principales, Omar Naldo R██████, en virtud de su fallecimiento. En dicha oportunidad, además, dispuso la forma en que esos bienes se distribuirían, previo el dictado de una serie de medidas -que, vale destacar, no fueron realizadas-, tales como la publicación de edictos y la notificación antes referida a la UIF.

No obstante, en posterior ocasión, el Juez se apartó de tal criterio y ordenó la inscripción de bienes inmuebles a favor del Gobierno Provincial y del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la entrega definitiva de un rodado al Tribunal de Cuentas de esta provincia, con ausencia de todo tipo de fundamentación lógica y jurídica que avale dicho pronunciamiento.

En tal punto, el art. 305 CP en su tercer párrafo dispone *“Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico”*. Dicha manda legal fue plasmada en el cuestionado punto 13° al que hemos hecho referencia anteriormente, al disponer que *“... el porcentaje restante será predestinado a financiar obras de infraestructura y/o viviendas públicas en la Provincia del Chaco **que beneficien de modo directo a la población más vulnerable**, una vez cumplidos los mecanismos legales establecidos.”* (el resaltado nos pertenece).

Así es que el Juez, en esta oportunidad, omitió la voluntad del legislador sobre el destino de los bienes decomisados como se ha señalado *supra*, e inmotivadamente consideró viable la inscripción y entrega de los bienes.

En ese aspecto, acierta el Fiscal General por cuanto mencionó en la audiencia que lo resuelto por el Magistrado no hace más que modificar el objeto del decomiso definitivo ya ordenado en su oportunidad, otorgando bienes de oficio y tras la petición de sujetos de derecho público estatal no contemplados por la norma aplicable.

De otro lado, los bienes inmuebles fueron dispuestos por el Juez sin impulso de las partes del proceso y sin intervención de los herederos del causante.



Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente

Fecha de firma: 12/08/2025

Firmado por: PATRICIA BEATRIZ GARCIA, JUEZA SUBROGANTE

Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA LORENA RE, SECRETARIA DE CAMARA



#40062064#466424029#20250812120217086

Y en orden a la finalidad reparadora que la ley otorga a los bienes, se observa en lo decidido una confusión entre utilidad pública y reparación del daño, conceptos distintos conforme la naturaleza de esta causa, lo que trasunta una deficiencia en la fundamentación.

En este punto se ha expedido la Cámara Federal de Casación Penal remarcando que "[T]oda decisión que afecte derechos como es el caso de un decomiso, debe estar mínima y suficientemente fundada, en los términos de los arts. 123 y 404, inc. 2, del código de rito. La exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional y trae, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y la jurisprudencia vinculados con la especie a decidir[...]. Esa base constitucional de que las sentencias sean fundadas encuentra apoyo en la garantía de la defensa en juicio, exige que los fallos de los jueces sean aplicación razonada del derecho vigente en razón de la naturaleza que le es propia de órganos de aplicación de la ley, y excluye la solución de las causas sin otro fundamento aparente que la expresión de la voluntad de los magistrados (Cfr. SALA IV. "PÉREZ CORRADI Y OTRO". CAUSA Nº 1322/2010. REG. Nº 2166/21. 23/12/2021).

Por lo hasta aquí expuesto, se configuran vicios que ameritan hacer lugar a la postulada nulidad del decisorio dictado en fecha 05/05/2025.

IV.- En afín orden de ideas, siguiendo la normativa que venimos analizando, el artículo 305 en su segundo párrafo establece "En operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiese ser enjuiciado **por motivo de fallecimiento**, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal...", cual es el caso de autos.

En este punto, claro está que los bienes sujetos a decomiso debieran pertenecer al fallecido Omar Naldo R[REDACTED].

Ello así, centrándonos particularmente en la entrega del vehículo Toyota Hilux dominio [REDACTED] KM, surge de la documental incorporada al presente legajo (acta de secuestro del rodado en el mes de abril del corriente año), que en la cédula de identificación del vehículo figura



Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente

Fecha de firma: 12/08/2025

Firmado por: PATRICIA BEATRIZ GARCIA, JUEZA SUBROGANTE

Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA LORENA RE, SECRETARIA DE CAMARA



#40062064#466424029#20250812120217086



Poder Judicial de la Nación

Cámara Federal de Apelaciones Resistencia – Secretaría Penal N° 2-

como titular del mismo "Rubén Antonio R [REDACTED] y otro", es decir que el bien es del coimputado en autos, cuyo auto de procesamiento se encuentra firme.

Siendo más específicas en el análisis, tras la digitalización de los autos principales, surge copia del estado de dominio de la mencionada camioneta, precisamente a nombre del mencionado R [REDACTED] y su esposa, Emilce Noemí R [REDACTED].

Concluyendo, por imperativo legal los únicos bienes sobre los cuales el Juez puede decretar el decomiso definitivo son aquellos propios del fallecido, por lo que no podía disponer la entrega de un rodado propiedad del coimputado, respecto de quien, a la fecha, no ha sido resuelta definitivamente su situación procesal.

Desde otra perspectiva, asiste también razón a lo argumentado por los recurrentes, quienes advirtieron la ausencia de constancias en autos que den cuenta de la notificación a los posibles herederos como la inscripción y publicación en el Boletín Oficial, y el efectivo diligenciamiento al Registro de Juicios Universales, resolviendo el Juez de manera prematura y apartándose de toda normativa prevista.

V.- En el marco fáctico y jurídico expuesto, habiendo analizado los cuestionamientos intentados, consideramos procedente hacer lugar a la nulidad planteada por los recurrentes ante la ostensible arbitrariedad de lo resuelto por el Juez *a quo* en fecha 5/5/2025 y consecuentemente, por los fundamentos brindados, declarar la nulidad absoluta de dicha resolución.

De tal modo y oídas las partes, el Tribunal por mayoría (art. 31 bis in fine CPPN) RESUELVE:

1º) NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por el representante de la UIF en carácter de tercero interesado, respecto a la resolución de fecha 20/11/ 2024, por los considerandos expuestos.

2º) HACER LUGAR a los recursos interpuestos por los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera, y consecuentemente, **REVOCAR** lo resuelto por el Magistrado de la anterior instancia en fecha 5/5/2025 y declarar la **NULIDAD ABSOLUTA** de dicho auto interlocutorio, por los fundamentos vertidos en los considerandos del presente decisorio y en lo que fuera materia de impugnación.

3º) Comuníquese a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la CSJN, de acuerdo a lo ordenado por la Acordada 10/2025.



Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente

Fecha de firma: 12/08/2025

Firmado por: PATRICIA BEATRIZ GARCIA, JUEZA SUBROGANTE

Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA LORENA RE, SECRETARIA DE CAMARA



#40062064#466424029#20250812120217086

Regístrese. Notifíquese. Líbrese DEO al Juzgado de origen y, fecho, previo cumplimiento del plazo de ley, devuélvase mediante pase digital.



Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente

Fecha de firma: 12/08/2025
Firmado por: PATRICIA BEATRIZ GARCIA, JUEZA SUBROGANTE
Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZA DE CAMARA
Firmado por: MARIA LORENA RE, SECRETARIA DE CAMARA



#40062064#466424029#20250812120217086